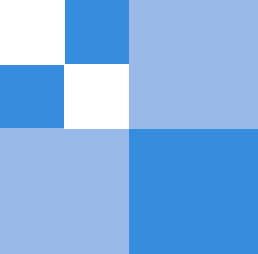




Conflictos olvidados



Varios Autores



La totalidad de este libro, tanto el contenido como el diseño están sometidos bajo licencia  <<Reconocimiento-No comercial-Obras derivadas>> que puede consultar en la red en

<https://creativecommons.org/licenses/?lang-es>

Edita CRISTIANISME I JUSTÍCIA
Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona
93 317 23 38 / info@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

ISSN: 2014-6485
Edición: Santi Torres Rocaginé
Corrección: Cristina Illamola
Diseño y maquetación: Pilar Rubio Tugas
Junio 2021

Conflictos olvidados

Varios Autores

Sumario

- 05 Introducción
- 07 Honduras: un país roto
- 15 Yemen: el peor desastre humanitario
- 24 República Centroafricana: violencia en el corazón del continente
- 34 Sáhara Occidental: la última descolonización
- 42 Birmania, de «Tierra Dorada de los Sueños» a escenario de pesadillas turbulentas

Ismael Moreno. Jesuita, defensor de los derechos humanos en Honduras. Director de Radio Progreso y del centro comunitario de derechos humanos ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación).

Pedro Moya. Profesor universitario, que ha sido parlamentario en el Congreso de los Diputados y secretario general de Acción Exterior en la Junta de Andalucía, entre otras ocupaciones. Sus áreas de dedicación han sido especialmente la Unión Europea, los países mediterráneos, el Magreb y el Próximo Oriente.

Ferran Puig. Ha sido director de la oficina de Oxfam en la República Centroafricana.

Albert Giralt. Coordinador de la Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui.

Introducción

La publicación de este cuaderno de la Colección Virtual en junio de 2021 responde a una doble necesidad: descentrar la mirada y huir del alud informativo monotemático del contexto en el que vivimos. A lo largo de este último año y medio, en Cristianisme i Justícia hemos centrado gran parte de la reflexión social y teológica en la situación derivada de la pandemia: artículos en el blog, cuadernos y papeles han intentado poner luz a una situación del todo excepcional. Pese a ello, hemos intentado mantener una rendija abierta para seguir reflexionando en clave de fe y justicia sobre otros problemas sociales presentes en todas partes, que, desafortunadamente, han quedado eclipsados por este fenómeno. Un ejemplo es la publicación del Cuaderno CJ n.º 220, «¿Por qué Haití?», escrito por Pau Farràs, diez años después del terremoto.

5

Visibilizar «conflictos olvidados» se enmarca en este intento por descentralizar la mirada y poner el foco en situaciones que escapan de la inmediatez y que requieren ser visibilizadas para que no caigan en el olvido. En estas páginas que siguen, hallaréis cinco artículos extensos que revisan las causas, el desarrollo y los posibles acontecimientos futuros de cinco países en conflicto. Hablamos de Honduras, el Yemen, la República Centroafricana, el Sáhara Occidental y Myanmar.

Los autores de los artículos son personas locales del territorio o que tienen un conocimiento cercano, dada su experiencia por haber vivido o trabajado en diversos proyectos (ver p. 4).

Los artículos también pueden leerse en el Blog de Cristianisme i Justícia, donde se publicaron originalmente con el *hashtag* #Conflicto-sOlvidados. En ellos también encontraréis fotografías e información sobre proyectos de entidades arraigadas en el territorio, que luchan por erradicar el conflicto y denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos.

Visibilizando el conflicto, visibilizamos a las víctimas y visibilizamos también a aquellos que sobre el terreno arriesgan su vida por denun-

ciar, pacificar, transformar, reconstruir... A ellas y ellos va dedicado este cuaderno, porque son seguramente la mejor semilla de esperanza que tiene nuestro mundo. Para ellos nuestro compromiso, nuestro agradecimiento.

Honduras: un país roto

Ismael Moreno

Honduras, un pequeño país con una privilegiada ubicación, con costas en dos océanos, cuyas fronteras terrestres lindan con tres países en la franja delgada de Centroamérica y con una amplia biodiversidad. Con más de nueve millones de habitantes en un territorio de 112,492 km², es mayoritariamente mestizo, aunque con al menos nueve etnias distintas. La sociedad está conducida por un grupo de unas 250 familias que conforman la élite oligárquica hondureña, en el ensamblaje de un modelo organizado para concentrar las riquezas y ganancias en muy pocas manos, dejando a millones sin oportunidades para acceder a una vida en dignidad.

7 Honduras es un país condicionado por la relación de sometimiento a Estados Unidos desde hace al menos 120 años. Fue en su costa atlántica donde se acuñó a comienzos del siglo veinte la expresión «*Banana Republic*» [‘república bananera’], que significa que tanto Estados Unidos como las multinacionales miran y se relacionan con Honduras sobre la base de permanecer como proveedor perpetuo de materia prima y productos para postre.

El impulso de la economía hondureña se sustenta en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la privatización de bienes y servicios públicos, y se impulsa desde una alianza que está constituida por una burocracia política de extrema derecha, una reducida élite oligárquica y las transnacionales. Esta alianza se respalda en los militares, el gobierno de Estados Unidos y el crimen organizado, específicamente el narcotráfico.

El 15 de septiembre de 2021 se cumplen doscientos años de la firma de una independencia centroamericana que ha negado la soberanía a los pueblos y ha impuesto durante dos siglos una política de “prevención” ordenada por las élites políticas, temerosas de “las consecuencias” posibles si fuera el pueblo el que proclamara su independencia. Honduras tiene una gran tarea pendiente: en contrapartida al modelo elitista y concentrador de riquezas y decisiones, debe impulsar una propuesta que parta de un nuevo concepto de «soberanía» basado en la capaci-

dad y el poder adquiridos por las personas, comunidades, organizaciones y Estado, para así tomar decisiones autónomas y libres sobre las vidas personales y el entorno, sobre los bienes y riquezas comunes, el presente y el futuro a partir del respeto de los derechos humanos y los derechos del planeta, asumido como nuestra casa común.

Sociedad rota

En Honduras todo está roto. A lo largo de lo que va del siglo, el pueblo hondureño se ha ido configurando en torno a un estado de indefensión y de damnificación. Esa ruptura de los tejidos se expresa en la desconfianza hacia todas las instituciones públicas y políticas, como ha quedado patente en los diversos sondeos de opinión pública del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, centro social y de derechos humanos de la Compañía de Jesús en Honduras).

Se expresa en la despolitización de más del cuarenta por ciento de la ciudadanía que afirma no pertenecer a ningún partido político, pero tampoco a organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales o de derechos humanos. Esa despolitización convierte al pueblo hondureño en un pueblo fácilmente manejable por políticos o grupos de fuerza, como bandas o estructuras del crimen organizado; pero, a su vez, en un pueblo que sospecha de todo y de todos, que dice «sí» a todo lo que viene de arriba, pero para hacer lo que le plazca. Lo convierte en un conglomerado bajo la única divisa posible del «Sálvese quien pueda».

8

Más miserables que pobres

Esa ruptura se expresa en la agudización del empobrecimiento de la población mayoritaria. Según algunos expertos, al finalizar 2020, ocho de cada diez personas quedaron bajo la línea de la pobreza. Las que comenzaron el año desempleadas, seguirán desempleadas y muchas de las que lo iniciaron con empleo, lo perderán. Así, el país avanza, y ya se encuentra en ella una sociedad con una alta dosis de miserables. Y esto es de alta peligrosidad porque se convierte en una tierra fértil para levantamientos espontáneos y sin control, o para populismos y mesianismos que se alimentan de poblaciones miserables a las que es posible manipular con respuestas asistenciales. Y la miseria se transforma en votos que legitiman autoritarismos y dictadores.

Una sociedad y un Estado estructuralmente desprevenidos

La ausencia de prevención es un problema estructural hondureño. Cruza la sociedad entera, ha invadido los dinamismos más profundos de la sociedad y de sus miembros hasta convertirse en un problema cultural. Todos los fenómenos naturales, políticos o humanos se convierten en amenaza, peligro y, finalmente, en destrozos mayores y deshumanización. Incluso asuntos como procesos electorales o el sistema judicial se sitúan en esta desprevenimiento estructural. Todos los dinamismos de la institucionalidad del Estado acaban convirtiéndose en amenazas y peligros para la misma democracia y para la aplicación de la justicia.

El hecho de que el Estado esté capturado por reducidos grupos políticos que lo usan para negociar y saquear recursos de las instituciones públicas confirma la desprevenimiento de la sociedad. Cuando se habla de que Honduras es el tercer país más desigual del planeta después de Sudáfrica y Haití, o el segundo país más vulnerable del planeta junto con Bangladés o uno de los dos países más corruptos del continente, se confirma la desprevenimiento de la sociedad. Cuando el sistema de salud no logra controlar el dengue o cuando los recursos para atender la pandemia son saqueados por los funcionarios de más alto nivel, se confirma la ausencia de prevención sistémica de la sociedad.

9

Cuando la institucionalidad del Estado en varias de sus dependencias, como las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la propia Casa Presidencial, fueron contaminados y penetrados por sectores del crimen organizado, primordialmente por el narcotráfico, se confirma la ausencia de prevención de la sociedad y del Estado.

Cuando la violencia ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un asunto administrado exclusivamente por el Estado, sino que el Estado mismo ha delegado esta administración a diversos grupos privados, se confirma que la prevención es un asunto ausente y la sociedad entera queda en indefensión o se convierte en víctima de una violencia sin control, en manos de sectores que de muy diversas maneras actúan en la impunidad y bajo el amparo del Estado.

Cuando los dinamismos estructurales de la sociedad conducen a que las riquezas se acumulen multimillonariamente en pocas personas, cinco de las cuales concentran una fortuna equivalente al salario mini-



mo anual de dos millones de hondureños, se confirma que la sociedad está gobernada por un sistema de vida productor de desigualdades y, por tanto, que anula sistémicamente la prevención.

¿Qué hacer ante la desprevención?

Todas las situaciones de vulnerabilidad, todas las amenazas y todos los peligros naturales sociales, ambientales, sanitarios y políticos pueden prevenirse. Todos. Como dicen los expertos, los fenómenos naturales nadie puede detenerlos, ni las más altas investigaciones han logrado hasta ahora mecanismos que detengan los fenómenos naturales. Lo que se puede prevenir son los desastres. Bien afirman que nadie detiene los fenómenos naturales, pero los desastres sí pueden prevenirse. Igual que con una pandemia como la COVID-19: una vez que el virus se desata, es difícil detenerlo, pero sí prevenir sus desastres. Desesperada, mucha gente se organiza en caravanas para tomar camino hacia Estados Unidos, como expresión de un modelo productor de desigualdades. Ambos desastres pueden prevenirse, porque no son fenómenos naturales; son sociales, políticos, institucionales y humanos.

10

La prevención: un estado estructural de estabilidad y confianza

La prevención es un estado estructural de la sociedad para asumir todas las situaciones o eventos con un nivel de desafío y advertencia, y, antes de que se presenten, la sociedad ya está predispuesta en positivo para asumirlos como desafíos y tareas. Esto vale para fenómenos naturales, climáticos o pandémicos, económicos, políticos, militares, culturales e institucionales.

Cuanto más se involucren las diversas instancias de la sociedad para poner en marcha procesos de prevención, mayor capacidad se tendrá para reducir las consecuencias. Y cuanto más cerca se esté de procesos que aborden las causas de los desastres, más capacidad se tendrá para que la prevención sea estructural y no puntual o coyuntural.

La prevención institucional y cultural, al tener una perspectiva de cambio estructural, nunca deberá sostenerse solo desde las líneas verticales ni definirse solo desde cúpulas, como es la lógica del sistema actual. Sin negar el aporte de las cúpulas políticas, empresariales, sin-



dicales, religiosas y sociales, la dinámica conductora ha de sostenerse en acuerdos nacionales con un fuerte componente participativo. La prevención institucional y cultural ha de cruzar el corto plazo, pero orientado hacia compromisos en el medio y largo plazo. Ha de sustentarse en hechos y compromisos específicos y coyunturales, pero trascendiéndolos.

ABC para Honduras

Honduras está en la necesidad de impulsar Acuerdos Básicos Compartidos (ABC). Los expertos hablan de «degradación de la sociedad», tanto de su modelo económico como del ambiente y la institucionalidad política. Cuando se habla de «sociedad degradada», se hace referencia a una sociedad y a un Estado que finalmente son gobernados desde decisiones, e incluso desde estructuras criminales organizadas transnacionalmente.

La sociedad hondureña, atrapada entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, la clase política y la violencia y delincuencia policial, es una sociedad deprimida y damnificada. Es necesario romper con la lógica de hacer lo mismo y de depositar el liderazgo siempre en los mismos. Este repensar el país ha de tener como punto de partida la aceptación consensuada de que así como estamos, al lugar al que hemos llegado, nadie tiene la capacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y, menos todavía, imponerlo a los demás.

11

Mínimos consensos: lo máximo a lo que podemos aspirar

Un punto de partida imprescindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompan con la lógica política excluyente es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que a corto plazo —y previsiblemente a medio plazo— no vamos a estar en situación de impulsar una propuesta buscando “máximos”, sencillamente porque la realidad no ofrece esas posibilidades.

Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de la democracia y el Estado de derecho. Y esto es así porque hemos perdido lo mínimo que una sociedad necesita de bien

común para su convivencia armónica. Esos mínimos perdidos son los que hay que recuperar como condición para poner en marcha procesos auténticos de construcción de la democracia y un Estado de derecho real. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que llamaríamos el «ABC hondureño», es decir, los «Acuerdos Básicos Comunes».

Para ello, habría que poner en marcha una convocatoria en la que se sienten las bases y se determinen la metodología, los tiempos y los responsables del proceso. ¿Quién la convocaría? Quizás es la primera cuestión que resolver, porque un rasgo del deterioro social de lo institucional es la ausencia de credibilidad de los actores, instituciones y personalidades. La convocatoria y el proceso deberían estar bajo la responsabilidad de instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto reconocimiento —que también existen— como a representaciones internacionales.

Un punto de referencia compartido es el hecho de que el gobierno actual no puede estar entre los convocantes. Las iglesias perdieron la base de credibilidad con la que contaban tradicionalmente, pero no pueden quedar fuera. El empresariado está disperso y sin sustento común, pero no puede quedar fuera. Los organismos de incidencia o las llamadas «ONG» son tan diversas y dispersas que resulta muy difícil encontrar en ellas la base para una convocatoria creíble y movilizada; pero no deben quedar fuera, por sus implicaciones en tan variados campos de la vida nacional y, especialmente, por su involucramiento en procesos muy cercanos a los municipios y comunidades locales.

Sin duda se necesitaría un componente convocador internacional que pudiera estar ligado a la defensa de los derechos humanos, sin descartar la participación de representantes oficiales de la ONU, aun con el grado de descrédito y desconfianza que ha acumulado. Este componente internacional es imprescindible, no solo por la ausencia de consensos en torno a convocantes internos, sino porque cualquier propuesta de solución al caso hondureño ha de pasar por negociaciones que involucren a la comunidad internacional. Cada uno de los sectores, tanto populares, políticos, empresariales como territoriales y temáticos, debería organizar su propio proceso de elaboración del ABC, de manera que todo el país se pusiera en movilización y en estado de construcción del ABC, desde las asambleas comunitarias, pasando por las sectoriales, municipales y departamentales, hasta llegar a las asambleas nacionales.

¿ABC sobre qué?

En un ABC de Honduras deberían estar incluidas algunas categorías de acuerdos:

La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y ambientales como la tenencia de la tierra, y políticas agrarias, la protección y manejo de las riquezas o recursos naturales, el empleo y la producción, la vulnerabilidad ambiental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda. Es decir, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo y de inversiones que rompiera con la galopante inequidad, factor decisivo de la violencia e inestabilidad.

La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, las relaciones de género, los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, así como los derechos culturales.

La tercera categoría sería la político-institucional-jurídica y tiene que ver con el derecho a la organización y a la participación en la toma de decisiones desde una institucionalidad que garantice una democracia representativa, participativa y directa; la transformación del sistema judicial, la reconfiguración del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos contralores del Estado, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y en general el diseño de una institucionalidad con capacidad para responder a las transformaciones contenidas en las dos primeras categorías.

Estas categorías no están separadas entre sí, cada una remite a las otras: la primera contiene acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción, lo que de inmediato se vincula con acuerdos que han de establecerse en torno a la legislación que regula el empleo, como es el caso del Código del Trabajo, hasta lograr un acuerdo mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores. De igual manera, si se buscan Acuerdos Básicos Compartidos en torno al empleo, deberá establecerse el vínculo con aquellos relacionados con la defensa de los derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria.

De entre todos estos temas, habría que definir los prioritarios, en qué orden empezar a tratarlos y qué procesos y mecanismos se requieren

para su implementación. Un ABC de Honduras de esta naturaleza debería orientarse finalmente a su ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redactase una nueva Constitución Política.

El diseño de un ABC de Honduras ha de ser una propuesta aglutinadora. Esto no significa que todo deba construirse desde cero, porque han de tomarse en cuenta experiencias exitosas que se hayan realizado en algunas zonas, municipios u organizaciones del país. Este ABC de Honduras ha de garantizar que no solo se busque la inclusión social y la democracia participativa en los objetivos, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa. Los sectores no oficiales y opositores están llamados a fortalecer sus propias instancias e identidades, y desde su capacidad organizada desarrollar sus propios acuerdos para convertirlos en fuerza y poder en una mesa de negociaciones, para evitar así que se imponga la ley del más fuerte.

¿Y en qué alimenta el pueblo hondureño sus esperanzas?

14

Existen al menos cinco nutrientes de la esperanza hondureña: 1) el de la Fe en el Dios de la vida. La sociedad hondureña es creyente y con frecuencia, ante los males, suele decir «Solo Dios con nosotros»; 2) el de los mártires y la memoria de los ancestros; 3) el de las comunidades organizadas en movimiento; 4) el de la generosidad y gratuidad de la gente más humilde; 5) el de la alegría y la fiesta; incluso en las situaciones de mayor angustia brota el baile y la sonrisa.

Yemen: el peor desastre humanitario

Pedro Moya

Antecedentes históricos

Yemen es una de las más antiguas cunas de la civilización del Próximo Oriente. Tierra próspera, la *Eudaimon Arabia* o *Arabia Felix* de los textos de Ptolomeo, alcanzó su máximo esplendor como Reino de Saba, el de su misteriosa reina y su amorosa relación con el rey judío Salomón. Tras sucesivas civilizaciones que florecieron al abrigo de un lucrativo tráfico de especias, el territorio entró en la órbita islámica bajo el control e influencia de los califatos de Damasco y Bagdad. Un emirato de la dinastía zaidita, una rama del islam chiíta, se mantuvo durante siglos como reino, con periodos temporales de sumisión al Imperio otomano y a la dinastía saudí. La presencia colonial vino de la mano de los británicos, que en 1839 se instalaron en el sur, en la región de Adén.

15

Durante la Primera Guerra Mundial, Yemen alcanza la independencia en 1918. Tras ingresar en la Liga Árabe y en la ONU, el último rey es derrocado en 1962 y se establece la República Árabe de Yemen, conocida como «Yemen del Norte». Mientras tanto en el sur, en la región de Adén, el dominio colonial británico, tras años de violencia y de ataques guerrilleros, dio paso en 1967 a la República Democrática Popular de Yemen, o «Yemen del Sur», el primer Estado árabe de orientación marxista, con el apoyo de la Unión Soviética. Tras enfrentamientos diversos entre los dos Estados y la caída de la Unión Soviética, ambas repúblicas avanzaron hacia la reunificación y en 1990 acabaron fusionándose en una, la actual República de Yemen.

Los orígenes del conflicto

La «Primavera Árabe» yemení

En 2011, en el contexto de una serie de revueltas y protestas acaecidas en todo el mundo árabe (Primavera Árabe), los yemeníes se rebelaron contra el régimen del presidente Ali Abdalá Salé con manifestaciones pacíficas que fueron violentamente reprimidas por el Gobierno.

El presidente se vio forzado a abandonar el poder tras 33 años en él (primero, como presidente de Yemen del Norte y, luego, de la República Árabe de Yemen) entre acusaciones de cleptocracia, corrupción y gobernanza fallida.

En su destitución desempeñaron un importante papel los *huthis* (en adelante, huties), grupo rebelde armado del norte del país y uno de los principales agentes políticos en el actual conflicto. La relación de los huties con el presidente Salé ha sido una suerte de montaña rusa: unas veces, su aliado y otras, su enemigo; acabarían asesinandole años después de su retirada, tras acusarlo de traición.

Una transición fallida

Tras la salida repentina de Salé, el vicepresidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi asumió la Presidencia a finales de 2011 con el objetivo de alumbrar una nueva etapa de apertura política y abrir un proceso de transición en el país. En el marco de una Conferencia Nacional de Diálogo, pretendía abordar los asuntos relativos a la gobernanza, la estructura territorial y la reforma del Estado, así como dar respuesta a las reivindicaciones surgidas de las protestas populares.

16

Tras dos años de consultas, la conferencia presentó un proyecto de estructura federal que dividía Yemen en seis regiones, sin tener en cuenta las reivindicaciones relativas a la distribución de los recursos naturales, el peso de las regiones comerciales o agrícolas, o el acceso a los puertos. El proyecto de reforma recibió un apoyo popular mínimo y, en particular, la firme oposición de los huties, para quienes el cambio a un régimen autonomista significaba una menor participación en la riqueza nacional, a la vez que les privaba de una salida al mar, que consideraban esencial.

La protesta acabó en insurrección y en el golpe de Estado de 2015, con la toma del palacio presidencial por parte de los huties, la disolución del Parlamento y el fin de la administración de Hadi, al que llegaron a expulsar de la capital Saná, obligándole a refugiarse en la ciudad portuaria de Adén junto con sus ministros y, posteriormente, a exiliarse en Arabia Saudí.

Guerra civil

Fue entonces cuando, a petición del depuesto presidente Hadi, una Coalición de Estados árabes encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos intervino con el objetivo de restaurar en el poder al gobierno reconocido internacionalmente y por las Naciones Unidas. Esta operación —llamada «Tormenta Decisiva»— señaló el comienzo de un conflicto armado abierto, mediante una campaña de bombardeos aéreos contra los hutíes. Sin embargo, cinco años de operaciones militares no han resultado suficientes para doblegarlos.

Los rebeldes ocuparon estratégicamente nuevos territorios en sus avances hacia el sur y establecieron su poder en nueve de las veintidós provincias de Yemen. Con ello, llegaron a controlar elementos clave como el puerto de Hodeida, en el mar Rojo, receptor del 80 % de las importaciones y centro neurálgico para el abastecimiento del país. Otro golpe audaz fue su ataque con drones, en septiembre de 2019, a las principales plataformas petrolíferas de Arabia Saudí, el cual obligó a reducir a la mitad su volumen habitual de producción, casi el 6 % de la producción mundial. Sigue sin aclararse el grado de participación de Irán en la operación, si bien se presume su colaboración, dada la envergadura de la acción.

17

Por si fuera poco, y aprovechando la debilidad del Gobierno nacional y el fracaso de las reformas federalistas que se intentaron durante la transición, los grupos y las milicias separatistas, aglutinados en torno al Consejo de Transición del Sur, alimentaron el sueño secesionista. Contaron con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, un país que ha desempeñado un papel ambiguo en la crisis, al ser, por un lado, aliado del Gobierno en su lucha contra los hutíes y, al mismo tiempo, al alentar las aspiraciones de los secesionistas del sur contra el Gobierno.

Finalmente, el Gobierno, con el apoyo de la coalición árabe, alcanzó el denominado «Acuerdo de Riad» (noviembre de 2019) por el que se prometía a los separatistas su integración en el Gobierno nacional, de modo que se abortaba temporalmente la aventura secesionista.

Meses después del citado acuerdo, la situación ha empeorado en todos los frentes: los separatistas del sur vuelven a la carga proclamando la «autodeterminación» en las zonas bajo su control (abril de 2020), la coalición árabe está herida de muerte por los intereses divergentes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que ya controla, con el

apoyo de las milicias separatistas, el estratégico puerto de Adén y el de la mítica isla de Socotra. Y los rebeldes huties lanzan la mayor escalada militar en dos años (octubre de 2020), en la estratégica ciudad de Hodeida, poniendo en grave riesgo el frágil Acuerdo de Estocolmo de finales de 2018. Podemos concluir que tras cinco años de guerra, el conflicto está militarmente estancado y no hay visos de una solución negociada.

En el terreno diplomático, Trump empeoró la situación al declarar a los huties «grupo terrorista» al final de su mandato. Biden, en cambio, apuesta por la diplomacia y ha retirado el apoyo militar estadounidense a la coalición saudí.

En marzo 2021 se ha producido un intento serio de poner fin al conflicto. Arabia Saudí ofrecía un «alto el fuego global» supervisado por NN.UU., la reapertura del aeropuerto de la capital Saná y el acceso de combustible y alimentos a través del puerto de Hodeida. Los huties lo han rechazado, al exigir previamente el levantamiento del bloqueo aéreo y marítimo por parte de Arabia Saudí. Las operaciones militares se han recrudecido.

Quién es quién en el conflicto

Los huties

Un emirato zaidita gobernó Yemen del Norte, bajo un sistema conocido como «imanato», durante casi mil años, hasta 1962, momento en el que se produjo la caída de la monarquía. Los herederos de esa tradición política y religiosa acabaron confluyendo en la constitución de un grupo rebelde conocido como *Ansar Allah* ('Partidarios de Dios'). El nombre de *huties* proviene de su fundador Hussein Badr al Din al Huti, líder del primer alzamiento en 2004, que pretendía recuperar el peso perdido en el noroeste del país y, asimismo, proteger la religión zaidita y sus tradiciones culturales, que consideraba amenazadas por los islamistas sunitas.

Sus orígenes se enmarcan como grupo de resistencia antisaudí y su papel deviene relevante en las protestas de la Primavera Árabe, que dan inicio a los acontecimientos de la guerra civil descritos anteriormente. Su salto cualitativo de grupo político reivindicativo a grupo armado rebelde es un factor determinante en el desarrollo del conflicto.

Desde el principio, cuentan con la simpatía y el apoyo de Irán, aunque estos lo desmientan formalmente, pero no se entenderían el arsenal militar ni la financiación del grupo rebelde sin el concurso de una gran potencia como Irán.

Coalición internacional de países árabes

La creó Arabia Saudí a principios de 2015 a petición del gobierno de Yemen, cuyo presidente Hadi acababa de ser depuesto en la ofensiva de los huties sobre la capital Saná, para combatirlos. El objetivo no es otro que reponer en el poder a su aliado yemení (ya en el pasado, Yemen estuvo vinculada a la monarquía saudí) y contrarrestar la influencia de Irán en la región, para evitar lo sucedido en Siria, Irak o Líbano, donde los chiíes detentan el poder y convierten a sus gobiernos en cómplices de la estrategia iraní.

La coalición cuenta con el liderazgo de Arabia Saudí y el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Catar y otros en menor medida, todos en la órbita suní. En el campo «occidental», la coalición es respaldada por Estados Unidos, que ha prestado importante apoyo logístico a su aliado saudí, así como por el Reino Unido y Francia, aunque con menor implicación.

Los separatistas del sur

Aglutinados principalmente en torno al denominado «Consejo de Transición del Sur», centraron su objetivo en celebrar un referéndum de autodeterminación para el antiguo Yemen del Sur. El fracaso de los intentos de reformas federalistas durante la transición dio alas al movimiento separatista y sus milicias, con la complicidad de los Emiratos, que buscaban expandir su poder geopolítico en la región, mediante el establecimiento de bases militares navales en el Cuerno de África, y el control de los puertos, las rutas marítimas y las islas próximas.

Algunas claves para entender el conflicto

El factor estratégico

Yemen, orientado hacia el mar Rojo y el golfo de Adén, es una zona fundamental para controlar el suministro de hidrocarburos en el mundo, en particular para los intereses energéticos de Estados Unidos y

Europa. Por sus aguas circulan casi cuatro millones de barriles de petróleo al día.

Una gobernanza fallida

El régimen autocrático instaurado por el presidente Salé en sus 33 años en el poder estaba basado en un clientelismo de familias, clanes y tribus, cuyas alianzas utilizaba y dividía en función de los intereses en juego. A ello se añadía el dominio casi absoluto de su partido, el Congreso General del Pueblo, en el Parlamento y las instituciones. La bonanza económica de las décadas ochenta y noventa por las rentas del petróleo permitieron una cierta estabilidad, pero los posteriores enfrentamientos con los hutíes y las revueltas de la Primavera Árabe acabaron en su derrocamiento.

Una suerte parecida le acaeció a su sucesor y actual presidente en el exilio, Hadi, con el fracasado proceso de transición. No obstante, su Gobierno mantiene el reconocimiento internacional y de las Naciones Unidas.

La fractura territorial

20

La fusión de los dos Yemen (Norte y Sur) que dio lugar a la nueva República resultó un tanto forzada y asimétrica: se sintió más como una absorción del sur por el norte que una verdadera fusión. Los intentos durante la transición de equilibrar la situación resultaron fallidos y la brecha entre los territorios de los dos antiguos estados se ha consolidado.

La lucha por la hegemonía política regional

Arabia Saudí, como líder de la coalición árabe, es el principal aliado del presidente depuesto y al que busca reponer. Irán, como potencia antagónica en la región, es el principal apoyo del movimiento hutí. Ambos juegan sus cartas en la región en un episodio más por liderar la hegemonía política en todo el Próximo Oriente. Yemen es, en gran medida, el teatro de operaciones donde se ventilan los intereses más globales de dos visiones geopolíticas enfrentadas.

Como ha ocurrido en los conflictos de Siria e Irak, ambas potencias libran en diferentes escenarios lo que se ha denominado «guerras por procuración o delegación», apoyándose en sus «grupos confesiona-

les» locales para las operaciones sobre el terreno: Arabia Saudí y el Gobierno yemení comparten la misma causa suní, mientras que Irán vuelca su apoyo al movimiento *huthi*, ambos en la órbita chiita.

Los intereses de las grandes potencias

Tanto Estados Unidos como Europa persiguen objetivos basados en la «seguridad»: seguridad energética y de las rutas marítimas, por las que circula el mayor tráfico mundial de petróleo, y también seguridad política ante la amenaza del terrorismo yihadista. Ante la debilidad del Gobierno nacional, Yemen se convirtió en territorio apetecible para los objetivos del islamismo radical: Al Qaeda instaló en Yemen una de sus bases estratégicas y ha regado el territorio de ataques terroristas; el Estado Islámico intentó hacer de Yemen una de las principales «provincias» de su quimérico Estado. Al Qaeda sigue viva, mientras que el Estado Islámico se ha visto arrastrado a su declive actual.

El factor «religioso»

El conflicto hunde sus raíces en la rivalidad religiosa ente chiitas y sunitas, con diferencias ancestrales que arrancan en el año 632 con las luchas internas por la sucesión del profeta Mahoma, lo que comenzó como una disputa entre dos vertientes del islam divididas desde entonces. El islam sunita es claramente mayoritario en el mundo árabe, mientras que el chiismo se concentra en Irán, con tentáculos de influencia en toda la región y, en particular, en Irak y Líbano. En el caso de Yemen, el 47% de la población pertenece a la rama chii y el 53%, a la suní.

No obstante, la rivalidad en Yemen no ha sido particularmente violenta en lo religioso. Según algunos analistas, el zaidismo es el grupo más moderado del islam chiita, que incluso en tiempos pasados mantuvo unas relaciones pacíficas de convivencia con los suníes locales. Ha sido en tiempos recientes, al calor de un sentimiento de marginación de su comunidad respecto de su pasado de siglos de poder zaidita, cuando se han visto arrastrados a una lógica identitaria y reivindicativa frente a lo que consideran «usurpación sunita». Conviene recordar que un emirato zaidita estuvo en el poder hasta su caída en 1962 y que la constitución de la República comportó una pérdida de poder zaidita, así como un auge del sunismo salafista, tanto en los partidos políticos como en el control de las mezquitas.

Una catástrofe humanitaria

La situación de Yemen constituye, según las Naciones Unidas, el «peor desastre humanitario» causado por el ser humano. Algunas cifras ayudarán a entenderlo:

Cerca del 80% de los veintiocho millones de yemeníes necesitan asistencia humanitaria urgente, catorce millones de personas sufren inseguridad alimentaria y casi dieciocho millones no tienen acceso a agua potable. La malnutrición aguda grave amenaza la vida de unos 400.000 niños menores de cinco años. Save the Children ha alertado sobre una desnutrición infantil casi endémica, lo que deja a 100.000 menores de cinco años entre la vida y la muerte. Solo la mitad de las 3500 instalaciones sanitarias del país funcionan, lo que significa que diecinueve millones de personas carecen de asistencia médica básica. La guerra ha forzado a tres millones y medio de personas a huir de sus hogares, de los cuales dos millones continúan desplazados. La hambruna y las epidemias de cólera han causado estragos, sobre todo entre la población infantil, dada la destrucción de los sistemas de alcantarillado y saneamiento. Ahora se teme que el coronavirus y otras enfermedades como el dengue completen la tragedia.

22

La reconstrucción de un Estado fallido en lo político, devastado en lo económico, destrozado en sus infraestructuras y con buena parte de su rico patrimonio cultural arrasado... requiere de una ayuda masiva por parte de la comunidad internacional. Las cifras, sin embargo, están muy lejos de las contribuciones que las Naciones Unidas solicitan a la Conferencia de Países Donantes. En 2019, de los 2600 millones de dólares comprometidos apenas se desembolsaron la mitad y, en 2020, el compromiso se ha quedado en 1350 millones, de los que solo se ha recibido un 24%. En palabras de Lise Grande, coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas para Yemen: «Vamos a tener que cerrar nuestros proyectos en 189 hospitales que la ONU apoya en el país» por falta de fondos.

Perspectivas de futuro

La situación está lejos de encarrilarse. Aún no se atisba la luz al final túnel. Para ello, se necesita que se cumplan algunas premisas:

- Una *desescalada militar del conflicto* que dé paso al silencio de las armas. Tras cinco años de guerra, la solución armada está estancada. No hay un vencedor claro, ni perspectivas de que lo haya. La creciente percepción de ese agotamiento podría servir de acicate para buscar otras salidas.
- La implementación gradual de «*medidas de confianza*» (intercambio de prisioneros, treguas...) que reduzca la tensión entre las partes y ayuden a superar las desconfianzas mutuas.
- Dar forma al convencimiento de que la *vía política*, basada en una negociación que culmine en la integración y la participación de todas las partes en el conflicto, es la única solución. Pero las posiciones siguen muy alejadas.
- las tendencias geopolíticas en el mundo árabe y la *rivalidad* crónica entre Arabia Saudí e Irán no ayudan. La constatación de que el actual enquistamiento no aporta réditos a ninguna de las dos potencias podría propiciar una apertura de negociaciones entre los yemeníes, que solo se iniciarían con el visto bueno de sus respectivos patronos.

Una nota personal. En marzo de este año tuve ocasión de participar en un encuentro con la comunidad yemení en Bruselas, organizado por la UNESCO, sobre los proyectos en marcha para la reconstrucción del país. Los datos, abrumadores, invitaban al desaliento, pero el contacto con el capital humano representado en unos 150 yemeníes, en su mayoría jóvenes, me deparó una sorpresa inesperada: si grande era la tarea que realizar, mayor era el entusiasmo transmitido por unos ciudadanos deseosos de volver a su país para participar en su restauración. Que así sea y que sea pronto.

República Centroafricana: violencia en el corazón del continente

Ferran Puig

Introducción

«Yo trabajo en la República Centroafricana. ¿En Sudáfrica? No, en Centroáfrica. Ah, ¿y dónde está eso?». La respuesta parece tan obvia..., ¿no?, pero no tengo suficientes dedos en las manos para contar cuántas veces he mantenido exactamente este mismo diálogo. Cosas del desconocimiento.

Sí, en efecto, aunque a muchos les pueda sorprender, la República Centroafricana —o RCA, para abreviar— es un país que existe realmente y que, como su nombre indica, se encuentra en el centro del gran continente africano o, mejor dicho, en Beafrica, el corazón de África, que es como los centroafricanos llaman a su país en la lengua nacional local, el sango. Un corazón fastuosamente verde, pues el país forma parte de la cuenca fluvial del río Congo, el segundo pulmón del planeta. La selva se extiende por todo el territorio volviéndose menos densa en el norte, ya en la frontera con el Chad, donde va tomando aromas de Sahel, aún lejos del Sahara.

Con una población actual estimada alrededor de los cinco millones de personas, el país es el penúltimo (188/189) en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2019 que elabora el PNUD, solo por delante de Níger. Es el último en esperanza de vida al nacer, con 52,8 años. El 75 % de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Algunas ciudades importantes del país tuvieron en su época una red eléctrica que dejó de funcionar hace tiempo, víctima seguramente del mal mantenimiento, de la falta de inversión, del vandalismo o de los saqueos.

Según el censo de 2003, las principales religiones de la República Centroafricana son el cristianismo (80,3 %, el 51,4 % del cual está formado por diversos grupos protestantes y el 28,9 %, la Iglesia católica), el islamismo (10,1 %), el animismo (9,6 %).

Un conflicto que viene de lejos

La naturaleza geográfico-administrativa de su nombre nos proporciona pistas sobre su origen. La República Centroafricana es un estado fruto del proceso de descolonización francesa de los años sesenta en África del oeste y central, un estado artificial, sin identidad nacional, que agrupó la gran diversidad de razas, religiones y lenguas que habitaban en ese territorio. Es heredero del territorio francés de Ubangui-Chari: «El (espacio) blanco en el mapa de África, el centro del continente, y cuyos contornos nadie podía trazar», como lo define Jean-Pierre Tuquoi en su libro *Ubangui-Chari, el país que nunca existió* (2017).

De su pasado precolonial, este inmenso y poco poblado territorio guarda ya recuerdos dolorosos: la esclavitud se practicó durante siglos, sobre todo por los sultanatos árabes de Ouaddaï, Ndélé y Birao establecidos en el norte, que favorecían la caza de hombres expidiendo «permisos de caza» para abastecer con esclavos los mercados de Magreb, Egipto, la península Arábiga e incluso Turquía.

La República Centroáfrica alcanza la independencia el 13 de agosto de 1960. Este periodo se caracteriza esencialmente por la sucesión de presidentes llegados al poder entre motines y golpes de estado. Entre ellos, destaca el pintoresco, aunque sangriento y cruel, «emperador» Bokassa I, quien gobernó entre 1966 y 1979. Los padres de quienes estudian la ESO sin duda recordarán la imagen del autodenominado emperador con su capa de piel de armiño (en pleno trópico), cetro y corona, en pretendida réplica de la ceremonia de coronación de Napoleón.

Françoise Bozizé (2003-2013)

Si hacemos un salto en el tiempo, saltándonos décadas de inestabilidad y conflictos armados, nos situamos en el 15 de marzo de 2003. Después de un golpe de Estado, François Bozizé llega al poder derrocando a Ange-Félix Patassé. Durante su mandato, se agudiza la etnicización del ejército y la administración. Su etnia, los gbaya, y especialmente los miembros de su familia ocupan todos los puestos clave. La corrupción y la opresión sobre las otras etnias se acentúan.

El país es denominado a veces la República de Bangui. La razón se halla en que, desde la independencia, todos los recursos, servicios, negocios... se han ido concentrado siempre en la capital. El olvido ge-

neral de las provincias es notorio, basta pasear por algunas ciudades medianas para constatar que los edificios administrativos existentes (prefecturas, hospitales, escuelas...) datan del periodo previo a la independencia, con su típica arquitectura colonial en versión rústica. La presidencia de Bozizé no contribuye en absoluto a alterar esta tendencia, más bien al contrario.

Es en estas regiones del remoto norte donde, fruto del abandono y el aislamiento, se empiezan a organizar milicias armadas. La población de estas zonas es de mayoría musulmana y mantiene vínculos económicos y sociales históricos con sus vecinos chadianos y sudaneses, más que con el resto del país. Sus reivindicaciones son políticas y económicas, no religiosas. La respuesta del Estado a estas reivindicaciones únicamente a través de la represión alimenta el apoyo de la población a estas milicias y el enrolamiento de los jóvenes como combatientes.

En agosto de 2012, las milicias más importantes se juntan y crean la se-leka ('alianza', en sango) bajo el liderazgo de Michel Djotodia. También se incorporan mercenarios chadianos y sudaneses que, terminado el conflicto chadiano-sudanés, han quedado en lo que se podría llamar «paro técnico». La se-leka avanza progresivamente en el control del territorio. En marzo de 2013, tras la conquista de Bangui, toma el control total del país, Bozizé es derrocado y Michel Djotodia accede a la presidencia del Estado.

Michel Djotodia (2013-2014)

Uno de los efectos inmediatos de la llegada de la se-leka a Bangui es la desaparición de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, las FACA. De un día para otro, el ejército nacional se disuelve. Un importante número de sus miembros se integran en los grupos denominados antibalaka. Estos tienen su origen mayoritariamente en grupos locales de autodefensa, mal armados y poco organizados, por lo general surgidos como pequeñas milicias de campesinos para protegerse de los grupos de pastores de etnia peul, que cada año llegan con sus rebaños durante el periodo de la trashumancia. Los rebaños de los nómadas a menudo desbordan los espacios abiertos, entrando en los campos y destruyendo las cosechas. La incorporación de los elementos de las FACA con sus armas aumenta la capacidad de estos grupos antibalaka, pero no consigue integrarlos en una milicia unida con capacidad operacional real.

Con la llegada al poder del presidente Michel Djotodia, las milicias seleka se entregan a la predación más absoluta de la capital y de las grandes ciudades del oeste: los robos de coches o de motos, los secuestros, las extorsiones... se convierten en moneda habitual. Si bien al principio se ceban únicamente con las comunidades cristianas, pronto se percatan de que los grandes comerciantes, principalmente de religión musulmana y que se concentran en el barrio de PK5 de Bangui, son los que tienen mayores recursos, por lo que pasan a ser también víctimas de todos estos abusos. Estos alcanzan tal dimensión que la comunidad internacional reacciona y presiona a Michel Djotodia para que ponga fin a esta situación. En respuesta a estas presiones, Djotodia decide disolver la seleka e intentar poner orden, sin conseguirlo. La tensión y el odio se acumulan entre la población contra los llamados, desde entonces, grupos exseleka que son identificados como milicias musulmanas.

La venganza de los grupos antibalaka llega el 5 de diciembre de 2013. Antiguos miembros de la guardia presidencial de Bozizé junto con antiguos miembros de las FACA de la mano de ciertos líderes antibalaka consiguen agrupar de forma temporal un contingente de unos mil elementos que ataca Bangui para echar a los exseleka y deponer al presidente Michel Djotodia. La carnicería alcanza tintes dantescos en las calles de la capital: cuerpos dentro de neumáticos ardiendo, personas colgadas de los árboles, cuerpos —o solo las cabezas— lanzados a los pozos para impedir que sean utilizados de nuevo... El contingente francés desplegado en la RCA, la fuerza Sangaris, no consigue frenar el caos desatado. La población huye presa del pánico y se refugia en grandes concesiones como parroquias, seminarios, mezquitas o la mayor de ellas: el mismo aeropuerto de Bangui. Solo en esta ciudad, cuatrocientas mil personas abandonan sus hogares en pocos días; cien mil de ellas se dirigen al aeropuerto, un espacio protegido por las tropas francesas.

Los días siguientes a la toma de la capital por los antibalaka, en Bangui y en el oeste del país se desarrolla una caza de hombres con el objetivo de masacrar la población musulmana considerada culpable de todo el sufrimiento causado por los seleka. Una mayoría huye y se refugia en el vecino Camerún, mientras otros se atrincheran en determinados territorios que se convierten en guetos completamente aislados y protegidos por milicias locales en general bien armadas. El mayor de ellos es el barrio de PK5 de Bangui, incrustado en el centro de la ciudad, defendido por diversos grupos de autodefensa que, con el tiempo, se convertirán en mafias de extorsión a la propia población.

La ascensión al poder de la sealeka y su posterior caída constituyen el golpe de gracia del derrumbamiento lento pero inexorable del Estado centroafricano, sumergiéndolo en una crisis sin precedentes de una duración que se anuncia larga. De hecho, nunca desde la independencia la República Centroafricana había experimentado una oleada de violencia colectiva semejante. La lógica de los motines y golpes de estado poco o totalmente incruentos o de luchas entre grupos armados se sustituye por un ambiente de guerra civil caracterizado por la desaparición total de las estructuras del Estado, una economía de supervivencia y un conflicto intercomunitario con connotaciones religiosas que ha dividido de facto al país en dos.

Las imágenes de las matanzas de Bangui se hacen virales y atraen la atención del público mundial, pero solo durante unos pocos días: pronto caen en el olvido. Derrocado Michel Djotodia, la comunidad internacional presiona para un diálogo nacional que en enero de 2014 se concretiza en un gobierno de transición bajo la presidencia de Catherine Samba-Panza, antigua alcaldesa de Bangui, con el mandato de organizar unas elecciones democráticas antes de finales de 2015.

Catherine Samba-Panza (2014-2015)

28

Cuando Catherine Samba-Panza llega al poder en medio del marasmo general, el gobierno apenas controla un veinte por ciento del territorio, circunscrito mayoritariamente al entorno de Bangui. Incluso en el centro de la capital, el barrio musulmán de PK5 escapa a dicho control. Desaparecidas las fuerzas nacionales, ese dominio relativo se realiza esencialmente gracias a las fuerzas francesas de la operación Sangaris. A partir del 10 de abril de ese mismo año 2014, progresivamente se irán añadiendo a esas fuerzas los contingentes de la misión multidimensional integrada de las Naciones Unidas para la estabilización de Centroáfrica (MINUSCA), formados por unos doce mil elementos entre civiles y militares. Los contingentes militares de los diferentes países participantes en la operación de paz se irán desplegando en las grandes ciudades del país sin que ello implique realmente un dominio territorial superior.

La mayor parte del país queda, de este modo, bajo el control de una pléyade de grupos armados, entre exsealeka y antibalaka, que aprenderán a convivir con la presencia de los cascos azules instalados en sus zonas, quienes no podrán —o no querrán— impedir los combates entre las diferentes milicias que tendrán como víctima final la pobla-

ción civil. Los enfrentamientos se irán sucediendo en los años siguientes en todas sus posibilidades: antibalakas contra antibalakas, selekas contra antibalakas, selekas contra selekas. La imprevisibilidad es total y las razones de estos conflictos son de lo más diversas: conflicto étnico, control de minas, simples incidentes que degeneran en violencia, robos, extorsiones, pillajes...

Muchas ciudades o barrios serán totalmente abandonados por sus moradores, quienes irán a instalarse en familias de acogida, en sitios de desplazados al lado de los campamentos de la MINUSCA, o partirán a los países vecinos como refugiados, sobre todo al Chad, a la República Democrática del Congo y a Camerún. Las cifras de desplazados irán aumentando hasta sobrepasar los 1,2 millones de personas, lo que significa que más del veinte por ciento de la población se ha visto obligada a abandonar su hogar. Las necesidades devienen ingentes: acceso al agua, letrinas, alimentos o alojamiento..., pero ni los fondos para financiar la respuesta humanitaria ni las Agencias ni las ONG internacionales tendrán la capacidad suficiente para ponerla en marcha a la escala requerida, centrándose en cubrir únicamente las necesidades más graves.

29

Al acercarse el plazo límite para celebrar las elecciones que deben poner fin al gobierno de transición, la violencia se desata de nuevo en el corazón de Bangui a finales de septiembre y, otra vez, a finales de octubre de 2015. Los combates entre las milicias musulmanas del barrio de PK5 y los antibalaka de los barrios que lo rodean provocan un nuevo flujo de desplazados y la destrucción total de esos barrios circundantes. El PK5 queda rodeado por un anillo de desolación que aísla todavía más a la población musulmana de la capital, una zona tampón vaciada de todos sus habitantes en la que la selva recupera su territorio.

Las elecciones, que se convocan in extremis para el 30 de diciembre, corren serio riesgo de anularse. Muchas voces cuestionan su pertinencia en un momento de tamaña inseguridad, pero un suceso inesperado provoca un cambio total de paradigma: el papa Francisco decide mantener la visita a la República Centroafricana que tenía planificada para el 29 y el 30 de noviembre. La visita, fuertemente desaconsejada por las fuerzas francesas responsables de su seguridad, incluye una misa multitudinaria en el estadio y una visita a la mezquita central de Bangui en el emplazamiento de PK5 y la apertura de la Puerta Santa en la catedral de Bangui, que abre el Año Jubilar de la Misericordia.

La visita del Papa resulta un gran éxito celebrado por todas las confesiones y creencias, y trae consigo una atmósfera de reconciliación que impregna todo el proceso electoral, permitiendo que las dos vueltas de las elecciones presidenciales y parlamentarias (30 de diciembre de 2015 y 14 de febrero de 2016) transcurran con total tranquilidad.

Faustin-Archange Toudéra (2016-...)

Faustin-Archange Touadéra, profesor de universidad y antiguo primer ministro de Bozizé, resulta elegido en segunda vuelta con el 62,7% de los votos. A pesar de pequeñas irregularidades, el proceso es considerado transparente y la victoria es reconocida por sus oponentes. Touadéra toma posesión del cargo el 30 de marzo de 2016 y empieza así un periodo de relativa calma que se romperá el mes de octubre cuando las luchas entre los grupos armados se retomarán en la zona este y volverán a desestabilizar el país.

Tras varios intentos, nada menos que ocho desde 2012, el 6 de febrero de 2019 se firma el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en RCA (APPR-RCA), también conocido como acuerdo de Jartum entre el Gobierno de la RCA y catorce de los principales grupos armados del país, bajo los auspicios de la Unión Africana y el apoyo de las Naciones Unidas. La sociedad civil centroafricana fue dejada completamente de lado durante todo este proceso. Detrás del acuerdo de paz se encuentra el impulso de Rusia, que empezó a ocupar el espacio dejado por Francia tras la salida de la operación militar Sangaris, que tuvo lugar en octubre de 2016.

El acercamiento entre Rusia y el gobierno de Touadéra se visibiliza por primera vez en 2017 tras una entrega de armas de Rusia al ejército centroafricano y el apoyo de los famosos instructores rusos, autorizados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinados a reforzar las capacidades del ejército centroafricano. En realidad, estos instructores son mercenarios de la famosa Brigada Wagner del magnate ruso Evgeny Prigogine, cercano a Vladimir Putin, que, entre otras cosas, formarán la nueva guardia pretoriana del presidente junto con elementos ruandeses de la MINUSCA. También aparece en escena Valery Zakharov, nuevo asesor de seguridad del presidente centroafricano y antiguo oficial de la inteligencia militar rusa. Esta presencia rusa no será del agrado de Francia, que se alejará gradualmente de Touadéra y de su antigua colonia.

Los grupos armados seguirán con sus prácticas de predación incluso después de firmar el acuerdo de paz. Son prácticas habituales imponer peajes en las rutas comerciales, ya sea a los camiones de paso como a los pobres campesinos que se acercan a la ciudad el día de mercado; explotar las minas de oro y diamantes abundantes en ciertas zonas del país; firmar acuerdos de «protección» a las explotaciones madereras, a los comerciantes o a los ganaderos trashumantes; las «tasas» en la administración de justicia. A pesar de periodos de calma relativa, las luchas fratricidas entre grupos arrasaron Birao en septiembre de 2019 y Ndélé en marzo de 2020.

Actualidad

El fin de 2020 trajo un nuevo ciclo electoral. Las elecciones se convocaron para el 27 de diciembre en primera ronda. Entre las candidaturas, destacaron la del presidente en ejercicio Touadéra y la del antiguo presidente Bozizé. La candidatura de este último fue rechazada por la Corte Constitucional al estar bajo una orden de detención internacional emitida por el Gobierno centroafricano en 2013. Las consecuencias de este rechazo fueron funestas.

31

Bozizé consiguió tejer alianzas con algunos de los mayores grupos rebeldes (AB, MPC, 3R, FPRC, UPC) y el 18 de diciembre, en los acuerdos conocidos como de Kamba Kota, se crea la Coalición de los Patriotas por el Cambio (CPC). Se trata de una unión contra natura que aúna tanto a grupos antibalaka como exseleka con el objetivo último de impedir las elecciones y la más que probable reelección del presidente Touadéra. La coalición se lanza a controlar el territorio y se acerca a la capital, Bangui; para ello, contarán con la participación de mercenarios de origen chadiano y sudanés.

A pesar de la situación de conflicto generalizado, las elecciones se celebraron en la fecha prevista gracias al apoyo omnipresente de la MINUSCA y el PNUD, y bajo la presión de la comunidad internacional que no aceptó un retraso en el proceso. La CPC, por su parte, impidió la apertura de los colegios electorales en las zonas bajo su control para deslegitimizar todo el proceso y acusó a Touadéra de fraude electoral con la colaboración de la MINUSCA. Al final, Touadéra ganó en primera vuelta con un 53,2% de los votos emitidos, pero que representaron un porcentaje muy reducido de los inscritos y, por tanto, minaron también su legitimidad. A pesar de ello, la comunidad internacional apoyó sin fisuras la elección de Touadéra para el nuevo mandato como única

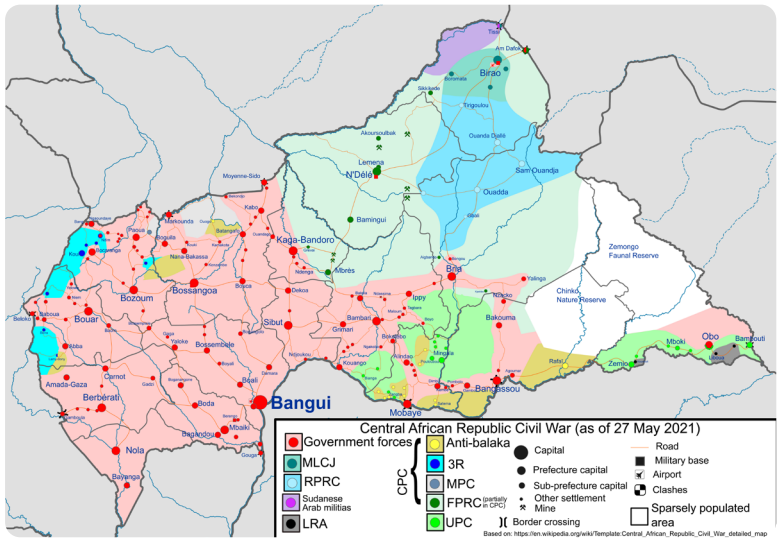
opción para el futuro del país. Francia no tuvo otra opción que aceptar, por el momento, que el intruso eslavo fuese ganando influencia en lo que consideraba sus dominios.

Ante el avance de las fuerzas de la CPC hacia la capital, Touadéra echó mano del apoyo ruso, que incrementó su presencia en el territorio, y también firmó un acuerdo con Ruanda para el envío de fuerzas bilaterales, no incluidas en el marco de la misión de paz de la MINUSCA, con una clara voluntad ofensiva y de reconquista del territorio. El 13 de enero de 2021, la coalición llegó a los barrios periféricos de Bangui, pero la superioridad aérea proporcionada por los helicópteros rusos y la colaboración de estos con las FACA y la MINUSCA lograron repelerlos. En los días sucesivos, las fuerzas gubernamentales consiguieron ganar terreno alrededor de la capital, pero no así liberar el paso de los camiones por la MSR1, la única gran ruta comercial que conecta Bangui con el puerto de Duala, en Camerún. El corte de este eje, verdadero cordón umbilical por el que se abastece la capital, provocó un incremento importante de los precios de los productos básicos y amenazó con ahogar la ciudad.

32

Con el transcurso de los meses, el Gobierno, con ayuda de los contingentes ruso y ruandés, ha ido recuperando una buena parte del territorio, tomando el control de ciudades clave como Bria, Kaga-Bandoro y Markounda entre otras, reabriendo el eje comercial de Camerún y recuperando algunas zonas mineras importantes (ver mapa). Tras los sangrientos choques iniciales entre las dos partes, la dinámica posterior ante el avance de las tropas gubernamentales ha sido más bien de una retirada progresiva de los grupos rebeldes y su atrincheramiento en ciertas zonas mineras de difícil acceso.

La dinámica actual no ofrece grandes oportunidades a la esperanza. La retórica del gobierno es la de la guerra y el rechazo de toda negociación. La posibilidad de recuperar el espíritu de los acuerdos de paz parece remota y la sociedad civil centroafricana permanece callada y dividida ante la situación. Es de esperar que en algún momento se establezcan las líneas de frente ante la incapacidad de unos y otros de controlar el país y que la situación se empantane de nuevo. Un suma y sigue que hunde la República Centroafricana cada día más en el pozo del subdesarrollo y la pobreza.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/War_in_Central_African_Republic.svg

República Centroafricana: las raíces de la violencia

International Crisis Group: Informe África n.º 230

21 de septiembre de 2015

Sáhara Occidental: la última descolonización

Albert Giralt

Entre la verdad y la mentira solo hay cuatro dedos de distancia: los que separan tu ojo de tu oído. Porque lo que te contaron puede que no sea cierto, pero nadie podrá negarte lo que has visto con tus propios ojos.

Proverbio saharauí

Breve introducción al conflicto

El año 1961, las Naciones Unidas crearon el Comité Especial de Descolonización o Comité Especial de los 24, con el objetivo de monitorizar cómo se estaba aplicando la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo fin era impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos que aún se hallaban bajo la administración de potencias coloniales. Uno de estos territorios era el del Sáhara Occidental que, en ese momento, aún era un territorio colonial bajo la administración de España.

El Sáhara Occidental es un territorio situado en el noroeste del continente africano, que limita por el este con Argelia, por el oeste con el océano Atlántico, por el norte con Marruecos y por el sur con Mauritania. Este territorio se convirtió en colonia de España en 1884, después de la Conferencia de Berlín, en la que los estados europeos se repartieron las colonias africanas y se definieron las fronteras. En 1958, para intentar evitar el proceso de descolonización, España declaró el Sáhara español como provincia. Pese a ello, las Naciones Unidas incluyeron al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos y, por tanto, que debían pasar por un proceso de descolonización. En aquel momento, Hassan II, rey de Marruecos, intentó aprovechar la situación y reclamar ante la ONU la anexión del Sáhara Occidental a su territorio.

Años más tarde, empieza a organizarse un movimiento independentista saharauí que se opone tanto al dominio español como a las pretensiones anexionistas de Marruecos. En 1969 nació el Movimiento de

Vanguardia para la Liberación del Sáhara, predecesor inmediato del Frente Polisario, cuyo primer congreso se celebró el 10 de mayo de 1973. Hoy en día, el Frente Polisario es reconocido como único representante legítimo del pueblo saharaui por las Naciones Unidas.

El 6 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco cada vez más cerca, las presiones internacionales por la descolonización del Sáhara Occidental y las pretensiones anexionistas de Marruecos y Mauritania, el Reino de Marruecos empieza la invasión del Sáhara Occidental con la denominada «Marcha verde» y justo ocho días después, el 14 de noviembre de 1975, el gobierno franquista firma con Marruecos y Mauritania los Acuerdos tripartitos de Madrid (carentes de cualquier validez legal internacionalmente), en los que cede el Sáhara Occidental a estos dos países. Comienza en aquel momento la guerra entre el ejército saharaui del Frente Polisario y el ejército marroquí por el norte y el ejército mauritano por el sur. Este estallido de la guerra provocó que miles de saharauis huyeran al exilio, al suroeste de Argelia, y establecieran allí los campos de refugiados de Tinduf, donde se calcula que viven unos 175.000 saharauis en condiciones durísimas desde hace más de cuarenta años.

35

En febrero de 1976, en Bir-Lehlu, los saharauis proclaman la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y nombran a El Uali Mustafa Sayed como primer presidente. Actualmente, la RASD está reconocida por más de ochenta países y es miembro de la Unión Africana.

En agosto de 1979, la RASD y Mauritania firmaron un acuerdo de paz en Alger, en el que Mauritania pasaba a reconocer la RASD y retiraba sus tropas de la guerra en el Sáhara Occidental. En noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En la misma resolución, deploó la gravedad de la situación que sufre el pueblo saharaui como consecuencia de la ocupación marroquí.

Durante los años ochenta, Marruecos inició el levantamiento de seis muros que actualmente suman más de 2.700 km, construyendo así el segundo muro más grande del mundo, rodeado por más de siete millones de minas antipersonas y divide en dos el Sáhara Occidental.

Tras años de guerra, el 6 de septiembre de 1991, el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos aceptaron el Plan de Paz de las Naciones Unidas y firmaron un alto el fuego que incluye celebrar un referéndum

de autodeterminación para el pueblo saharaui. En aquel momento se creó la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), única misión de las Naciones Unidas que no tiene en su mandato monitorizar la vulneración de los derechos humanos.

Durante años, Marruecos dispuso todo tipo de impedimentos a la celebración del referéndum: el bloqueo de cualquier acuerdo para consensuar un censo colonizando de forma descarada el Sáhara Occidental para así intentar «marroquinizar» la zona, así como la represión de cualquier acto de identidad saharaui.

La población saharaui vive, por tanto, dividida desde hace décadas. Más de 173.000 saharauis viven como personas refugiadas en los campos de Tinduf, en las condiciones hostiles de la hamada argelina y con gran dependencia de la ayuda humanitaria. Miles viven en la diáspora, muchas como apátridas o sin conocer su tierra. Y la otra parte vive en el Sáhara Occidental ocupado, sufriendo diariamente la represión y las vulneraciones de derechos por parte del ocupante marroquí, esperando que la comunidad internacional actúe para garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, la única vía posible a la solución pacífica del conflicto.

La resistencia del pueblo saharaui

El pueblo saharaui es un ejemplo de lucha y resistencia no violenta a lo largo de los años, desde 1991 con la firma del alto el fuego hasta la ruptura de los acuerdos por parte de Marruecos en noviembre de 2020. Uno de los episodios más destacados es el [campamento de la dignidad, Gdeim Izik](#).

En octubre de 2010, un grupo de jóvenes saharauis inició una protesta pacífica en las afueras de Al-Aaiun, en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, que, en pocos días, reunió a decenas de miles de saharauis cuyas jaimas plantaron en medio del desierto, en lo que denominaron el campamento de Gdeim Izik.

El campamento de la dignidad empezó por reclamar que los saharauis pudieran tener acceso a sus recursos naturales y que finalizara la marginación y la precariedad en la que viven desde hace décadas por la ocupación marroquí. Tras un mes en el que dicho asentamiento

no paró de crecer, Marruecos, con la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, envió a un ejército y a la policía para que intervinieran: desmantelaron el campamento utilizando la fuerza impunemente y con total brutalidad, dando lugar a uno de los episodios más violentos que se conoce en el conflicto saharaui.

El desalojo fue brutal: jaimas quemadas, personas heridas, detenidas, desaparecidas... La represión por parte del Reino de Marruecos llevó a perseguir y detener a centenares de saharauis acusados de participar en las protestas, un derecho legítimo de todas las personas.

Pese a la imponente demostración de fuerza popular y de ejemplo de lucha no violenta que supuso Gdeim Izik, el pueblo saharaui hace más de treinta años que reivindica sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho legítimo a la autodeterminación y a la explotación de sus recursos. Mientras tanto, se sigue viviendo una vulneración constante de derechos por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, que actúan con total impunidad ante la pasividad de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas.

37

Otro ejemplo de esta resistencia de la sociedad civil saharaui es la campaña internacional [Western Sahara is not for Sale](#), iniciada en enero de 2021, con la que más de 120 organizaciones de la sociedad civil saharaui quieren denunciar el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Esta campaña nace fruto de la celebración de la conferencia Sahara Rise a principios de 2018, en la que la sociedad civil saharaui se organizó para elaborar la estrategia de lucha no violenta de su pueblo para terminar con la ocupación marroquí.

El expolio de recursos naturales

Durante todos estos años de ocupación ilegal, Marruecos también está llevando a cabo un expolio ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental: pesca, fosfatos, agricultura... del cual se beneficia sin complejos, vulnerando las resoluciones internacionales que impiden la explotación de los recursos de un territorio sin el consentimiento de su población.

El Sáhara Occidental tiene algunas de las mayores reservas de fosfatos y de mayor calidad del mundo; además, en las aguas del Sáhara se pueden hallar grandes bancos de pesca y cuyo potencial se calcu-

la que puede generar suficiente energía renovable para abastecer a toda la región del Magreb. El expolio ilegal por parte de Marruecos y el beneficio que saca junto con las grandes empresas transnacionales contribuye a prolongar en el tiempo el conflicto del Sáhara y el sufrimiento de su pueblo.

De este negocio sacan beneficio empresas españolas, francesas, alemanas, rusas y estadounidenses, entre otras, en connivencia con el Reino de Marruecos y sus élites económicas y políticas. Se hace en contra del derecho humanitario, así como de diversas resoluciones internacionales, que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la soberanía de sus recursos.

En el año 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 63/102, la cual reconoce que los recursos naturales de los territorios no autónomos son patrimonio de estos pueblos, incluidas las poblaciones autóctonas, y destaca que cualquier actividad orientada a explotar los recursos de dichos territorios debe hacerse con el consentimiento previo de su población, y garantizando los derechos fundamentales.

38

Paradójicamente, los estados miembro de la UE, guiados por las normas del derecho internacional y las resoluciones de la ONU, no reconocen formalmente la soberanía de Marruecos sobre el territorio en ningún documento, ni su jurisdicción sobre los Territorios Ocupados ni las aguas territoriales saharauis. Sin embargo, desde hace décadas, los acuerdos de la UE y Marruecos incluyen la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Una de las vías por la que Marruecos exporta los recursos del Sáhara Occidental es la zona del Guerguerat, situada al sur del Sáhara Occidental y cercana a la frontera con Mauritania: un territorio estratégico donde las fuerzas de ocupación marroquí han mantenido abierta una brecha ilegal durante años, por donde pasa el transporte de mercancías resultado del expolio de los recursos naturales saharauis, vulnerando convenios internacionales y generando ganancias millonarias de forma ilegal.

Ruptura del alto el fuego y aumento de la represión

En octubre de 2020, un grupo de civiles saharauis iniciaron una protesta no violenta en la brecha ilegal de Guerguerat, acamparon e izaron banderas saharauis ante este punto fronterizo, cortando el tráfico de mercancías que acostumbra a cruzar esta zona. Exigían su cierre y reclamaban a la MINURSO que cumpliera con su mandato y organizara un referéndum legítimo para la autodeterminación del pueblo saharauí.

La madrugada del 13 de noviembre, el Reino de Marruecos cruzó la brecha ilegal del Guerguerat para desalojar a las personas saharauis que allí se manifestaban, rompiendo todos los acuerdos de paz aceptados. Ante esta situación, el Frente Polisario intervino para proteger a los civiles de las agresiones marroquíes, mientras estos intentaban abrir otra puerta en el muro de la vergüenza para poder continuar con el expolio de recursos del Sáhara Occidental. El Frente Polisario respondió al ataque con una maniobra militar.

Todo esto condujo al Gobierno de la RASD a declarar la ruptura del alto el fuego, hecho que inició una escalada militar en el Sáhara Occidental, que ha desembocado en una guerra después de 29 años de alto el fuego.

Desde la ruptura del alto el fuego, las fuerzas de ocupación marroquíes aumentaron el despliegue militar y policial en diferentes ciudades del Sáhara Occidental ocupado, como El Aaiún, Bojador y Dajla. Las detenciones arbitrarias, así como las agresiones, las torturas, los registros domiciliarios, el aislamiento y la vigilancia domiciliaria y el control de movimientos se han convertido en el día a día en los Territorios Ocupados, vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de los saharauis que viven allí.

Durante todo este tiempo, Marruecos ha mantenido el territorio cerrado y ha impedido las visitas de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ONG, juristas y medios de comunicación independientes, que intentan documentar de la situación que se vive en el Sáhara Occidental ocupado y ser testigos de ello.

Medios de comunicación locales, como Equipe Medie, informan sobre la brutal represión sistemática por parte de la policía marroquí contra

civiles, activistas y manifestantes saharauis en las diferentes ciudades ocupadas.

Solo los primeros meses de 2021, decenas de activistas saharauis han sufrido y sufren la represión del ocupante marroquí. El expreso y político Ghali Bouhala fue detenido en los Territorios Ocupados, violaron su domicilio y robaron los teléfonos móviles de toda su familia. Agentes de la policía marroquí secuestraron al activista saharauí Mohamed Nafaa Boutasoufra cuando caminaba por las calles de El Aaiún ocupado. Tras varios días desaparecidos, el 15 de febrero un tribunal marroquí dictaminó prisión para ambos activistas, acusándolos de un falso delito de posesión de drogas, según informa Equipe Media.

Mohamed Lamin Haddi fue condenado a veinticinco años por la protesta no violenta de Gdeim Izik. Hace diez años que está en prisión y tres, en aislamiento. Desde enero está en huelga de hambre indefinida para protestar contra los abusos, las agresiones y las duras condiciones de su encarcelamiento. No puede recibir visitas de su familia y no se tienen noticias de su estado de salud. Las últimas noticias sobre su caso afirman que está siendo alimentado a la fuerza y que se encuentra en un estado de extrema debilidad.

40

La activista Sultana Khaya lleva desde noviembre en arresto domiciliario ilegal. Su casa está rodeada por la policía marroquí. Sultana y su hermana han sido víctimas de agresiones físicas y de violencia sexual en su casa por presuntos miembros de las fuerzas de ocupación. Por su parte, la defensora de los derechos humanos y miembro de la ISACOM (Instancia Saharauí contra la Ocupación Marroquí) está desde mayo bajo arresto domiciliario y vive cercada por la policía marroquí. Se encuentra totalmente aislada, sola, sin luz ni contacto externo alguno.

A estos hechos hay que sumarles el ataque al investigador, activista y defensor de los derechos humanos y de los recursos naturales Lahcen Dalil, que fue secuestrado, torturado y abandonado en el desierto el pasado 10 de mayo por la policía marroquí. El mismo día, el presidente de CODESA Babouzaid Mohamed Saeed y los activistas Khalid Boufraywa y Salek Babir, que se encontraban en la casa de Sultana Khaya monitorizando los ataques y la represión sistemática contra ella y su familia, fueron detenidos, torturados, esposados y abandonados también en pleno desierto, a 120 km al norte de la ciudad de Boujador, por parte de las fuerzas de ocupación.

Y ahora... ¿qué?

Llegados a este punto, ¿el conflicto del Sáhara Occidental tiene una solución posible? ¿Hay atisbos de esperanza en la situación actual? Pues depende, básicamente, de la voluntad de las Naciones Unidas y de sus países miembros.

Es indudable que la ocupación por parte del Reino de Marruecos del Sáhara Occidental y el abandono del estado Español son completamente ilegales. Por tanto, la única solución posible es volver al inicio: finalizar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental a través de un referéndum de autodeterminación con el que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro.

Desgraciadamente, y como pasa en muchos lugares, los intereses económicos tras la explotación de recursos que el Reino de Marruecos ejecuta en el Sáhara Occidental llevan a pensar que esta solución no la obtendremos en un período corto de tiempo, pero si hay un pueblo convencido de su lucha y de su verdad este es el pueblo saharaui. Y esto no podrán enterrarlo por más generaciones de saharauis que pasen sin poder volver a su tierra.

Birmania, de «Tierra Dorada de los Sueños» a escenario de pesadillas turbulentas

(Actualización urgente tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021: Este artículo se escribió inicialmente en diciembre de 2020, poco después de la celebración de las elecciones. La líder democrática, Daw Aung San Suu Kyi, había ganado por amplia mayoría. El pueblo esperaba que los nuevos líderes juraran el cargo. Desafortunadamente, el día de la formación del nuevo Parlamento, Daw Aung San Suu Kyi y los miembros del Parlamento fueron detenidos durante las primeras horas del 1 de febrero de 2021. El ejército había perpetrado un golpe de Estado inesperado. El pueblo de Birmania aún continúa rebelándose contra este acto infame, con un coste altísimo de vidas y bienes. La brutalidad que se vive en las calles horroriza al planeta, que recibe las imágenes del caos a través de las redes sociales. La cruel respuesta de la junta militar ha levantado condenas por todo el mundo. Daw Aung San Suu Kyi está encarcelada en algún lugar desconocido, acusada de crímenes abominables y privada de un proceso justo. La violencia continuada conmociona al planeta y genera incerteza por la presencia de un «estado fallido» en el sureste asiático que altere la estabilidad de los países vecinos. La deriva antidemocrática no es solo una pesadilla para Birmania, sino una amenaza para la estabilidad económica y social de la región. La paz es posible si potencias cercanas como China, India, la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) y la ONU se implican de forma proactiva en la resolución de este conflicto. La región puede recoger los inmensos beneficios derivados de la paz, cuando Birmania recupere la paz y la democracia. Este artículo, que conserva el formato original, desgana los diferentes obstáculos que ha sufrido Birmania a lo largo de la historia y que, tras el golpe, es aún más urgente solucionar.)

Introducción

Es necesario explicar la historia de Birmania, como advertencia, a un mundo que tiende a caer rápidamente en democracias intolerantes infectadas de populismo demagógico y nacionalismo que busca la confrontación. La historia de Birmania es la historia de la resistencia de un pueblo contra uno de los gobiernos militares y totalitarios más asfixiantes. Tras siete décadas de conflicto, desplazamientos y muertes, Birmania ha puesto rumbo a una «democracia disciplinada». Daw Aung San Suu Kyi ha logrado recientemente la abrumadora victoria en las elecciones. Pese a los recelos occidentales hacia este ídolo de la democracia antes tan admirada, ella lleva en sus frágiles manos y hombros la confianza y la esperanza de millones de birmanos.

Birmania es conocida a lo largo de la historia como la «Tierra Dorada». Para el mundo espiritual, Birmania es considerada el lugar de origen del antiquísimo budismo theravada. Dos de las pasiones actuales de Occidente, la meditación vipassana y el *mindfulness* (consciencia plena), proceden de esta tierra. Tierra de recursos humanos y naturales extraordinarios, Birmania tiene una historia de mal karma, con guerras interminables, golpes de estado y desplazamiento de millones de personas. Considerada durante un tiempo el Xangri-La, en este país viven unos 500.000 monjes seguidores del budismo theravada, que llevan una estricta vida ascética. También es un país de una belleza resplandeciente: tres ríos majestuosos recorren alegremente el territorio, alimentando a millones de personas. La población compone un lienzo colorido y caótico de ocho grupos étnicos principales y 135 subtribus.

Situada en un punto geoestratégico privilegiado entre economías de crecimiento rápido como India y China, Birmania está rodeada por el 40 % de la población mundial. Los recursos que en ella abundan, en el suelo y el subsuelo, son el oro, el jade, metales preciosos, gas y petróleo. Tesoros como rubíes, zafiros, perlas y jade se ocultan en su vientre. Birmania es el valle de los rubíes, una gran fuente de ingresos, pues el 90 % de los rubíes de todo el mundo proceden de este país. Aparte, estas piedras rojizas son valoradas por su pureza y tonalidad. Además, el 50 % de toda la madera de teca de la variedad *wooden gold* del mundo procede de Birmania.

Estos recursos son el origen de un eterno conflicto entre el centro y la periferia: en el centro es donde vive el grupo étnico bamar, que supone el 70 % de la población y el que dirige el país. En la periferia

es donde viven las minorías étnicas o no bamares, que constituyen menos del 20% de la población, pero viven en el 40% del territorio y sus tierras contienen el 80% del jade, oro y rubíes, tan preciados. Los conflictos son frecuentes, pese a los breves intervalos de alto al fuego y las conferencias de paz.

Birmania es un país que está en guerra contra él mismo en tres fuentes: la cultural, la de los recursos y la identitaria. El punto más crítico del conflicto sociopolítico desde la independencia de Birmania son las disputas centro-periferia entre el gobierno central, dominado por la mayoría étnica bamar, y los insurgentes de las minorías étnicas que viven en las zonas fronterizas del país (Jones 2014). Es el clásico conflicto centro-periferia.

Esta historia de odio y muerte ha provocado millones de refugiados y de desplazados, y miles de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes (International Crisis Group 2020). Los diferentes grupos étnicos han sufrido reubicaciones forzadas, subdesarrollo en las zonas en las que viven y altos niveles de pobreza.

44

Durante la pasada década, esta grave situación aumentó de intensidad, acentuó la división entre budistas y musulmanes, y generó en una de las peores crisis de refugiados rohinyás del mundo moderno (International Crisis Group 2020). En octubre de 2017, se calcula que había unos 800.000 refugiados rohinyás en Bangladés (ACNUR agosto 2020). ACNUR se refirió a la persecución de los musulmanes rohinyás del noroeste del estado de Rakhine como «ejemplo de manual de limpieza étnica»¹.

Divisiones motivo de conflicto

Una serie de divisiones provoca las tensiones y enfrentamientos que hay dentro de este país y afecta a su capacidad de crear una unidad nacional y de distribuir de manera equitativa los frutos del desarrollo, en caso de que se produjese esta oportunidad.

Las divisiones y las tensiones que hay dentro de la Birmania moderna pueden conceptualizarse del siguiente modo:

- Entre el nacionalismo birmano y un nacionalismo étnico relativamente nuevo y diverso, que es un componente de los problemas centro-periferia y que afecta al tema de la unidad nacional.

1. Human Rights Watch, Burma: Discriminatory Laws Could Stoke Communal Tensions (Nueva York: HRW, 23 de agosto de 2015).

- Entre los sectores civil y militar de la sociedad.
- Entre la globalización y el nacionalismo.
- Entre el centralismo y el pluralismo.
- Entre la ortodoxia y las visiones opuestas del papel del estado y la sociedad.
- Entre grupos religiosos.
- Nuevas rivalidades geopolíticas internacionales que afectan a las actitudes internas de las autoridades².

2. http://www.burmalibrary.org/docs/Steinberg-Myanmar%27s_problems.htm

Alcance de este artículo

Este breve artículo sobre Birmania analiza las causas originarias de los conflictos: la polémica teoría de la colonización interna por parte de las poderosas élites locales en la época de la descolonización, los efectos mutiladores de las narrativas excluyentes y esencialistas de la construcción nacional, la institucionalización de la injerencia militar en la política democrática, la manipulación del proceso constitucional nacional, la discriminación endémica, el origen étnico de los conflictos, la maldición de los recursos, los conflictos provocados por la corrosiva economía ilícita y, finalmente, el ascenso del extremismo religioso, la connivencia de las élites etnonacionalistas y las élites religiosas, y el uso que hacen de las ansiedades ontológicas para crear chivos expiatorios. Los actores internacionales también contribuyen a ello: Birmania rebosa de xenofobia e islamofobia. El mundo conoce Birmania sobre todo por cómo se ha tratado a los musulmanes rohinyás.

45

El estudio no acaba con pesimismo. La noche más larga de lágrimas silenciosas acaba al alba. Birmania ha sobrevivido a cinco décadas de dictadura de una junta militar. La dolorosa transición desde el totalitarismo viene marcada por dos elecciones. El pueblo ha votado de forma abrumadora a favor de la democracia: el icono democrático Aung San Suu Kyi ha ganado por amplia mayoría las últimas elecciones e inaugurará su segundo mandato en enero de 2021. El pueblo ha rechazado a los extremistas nacionalistas y al partido defendido por los militares. Incluso las etnias no bamares han votado a Aung San Suu Kyi, mostrando así su agotamiento por la guerra y el deseo de construir una nación sobre las bases de la inclusión, la justicia, la paz y la prosperidad para todo el mundo. Terminamos analizando las chispas de esperanza para una nueva Birmania.

La construcción nacional: el conflicto incrustado en el concepto de nación

Las heridas purulentas de la descolonización y el fundamentalismo binario

Birmania representa los fracasos poscoloniales en un microcosmos: conflicto étnico, *impasse* político, militarización, empobrecimiento económico y marginalización de los pueblos locales (Smith Dec 2019). La nación aún debe decidir entre el nombre de Birmania o el de Myanmar. Las semillas de discordia las plantaron los colonizadores británicos, quienes dividieron el pueblo en un sistema binario letal: bamares y no bamares (Greaves 2007). Uno, con valor; los otros, con un insignificante valor negativo intrínseco.

El dominio británico sobre Birmania duró de 1824 a 1948. La colonización prosperó sobre la teoría tóxica de la formación binaria. Siempre había un «alguna cosa». Como en el caso de la etnia bamar y las no bamares: a través de un proceso de «diluir y devaluar» la identidad de la gente, se crearon las bases de futuros conflictos. La supremacía colonial, como argumentan Sium, Desai y Ritskes, perfeccionó la configuración binaria como sutil herramienta de explotación:

Es importante tener en cuenta el proceso y la lógica de la modernidad colonial y la supremacía blanca, el modo en que los europeos definían y clasificaban a las personas —como humanas y no humanas— y lo utilizaban posteriormente como base para conquistar tierras y subyugar poblaciones a través de la esclavitud, el trabajo no remunerado y la guerra.

(A. Sium, C. Desai y E. Ritskes 2012)

¿Qué relevancia tiene este argumento para Birmania? Como Paulo Freire explicaba en *Pedagogía del oprimido*, el pueblo oprimido y dominado interioriza los valores del opresor. En la Birmania posindependencia, la mayoría nacionalista bamar, durante el proceso de descolonización, no solo elaboró su fórmula binaria, sino que, incluso, adoptó leyes coloniales de la propiedad para adueñarse de las tierras y los recursos tradicionales de las etnias no bamares. Estos privilegios de la comunidad bamar y el hecho de que el Estado se quedara los inmensos recursos naturales han sido violentamente contestados por las otras nacionalidades étnicas.

Todo ello ha hecho aflorar el controvertido concepto de *colonización interna*. Chávez lo define así: «El término "colonialismo interno" explica el estatus subordinado de un grupo racial o étnico en sus propias tierras, dentro de los límites de un estado mayor dominado por un pueblo diferente» (Chávez, diciembre 2011)³. Las luchas históricas, como las de los indios y los colonizadores de las Américas, o las de los ingleses y asiáticos, tuvieron mucho que ver con las reclamaciones de las tierras, los recursos y la cultura de los indígenas (Chávez, diciembre 2011). En Birmania, la manera como eran tratados los grupos étnicos no bamares se basaba en una mentalidad colonial.

3. https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=hum_sci_history_research

Sai Latt, un experto en conflictos perteneciente a una etnia no bamar, escribe que la colonización interna es el problema clave de los conflictos birmanos:

La patología política de Birmania, si se me permite utilizar el incómodo término biopolítico, es un proceso de colonización interna aplicado por la clase dirigente birmana. Las conclusiones habituales sobre las causas del conflicto étnico, como la falta de un federalismo «genuino», de autodeterminación, de democracia y de derechos humanos son solo los síntomas. Sin atacar el tema del colonialismo interno, todos los intentos por estabilizar el país están condenados al fracaso.⁴ (Latt 2013)

4. <https://www.newmandala.org/colonialism-and-ethnic-conflict-in-burma>

Narrativa excluyente y esencialista en la construcción nacional

Incluso antes de que los movimientos independentistas bamares como Dobama Asiayone ('Nosotros, los bamares') comenzaran a propagar cuantificadores de «pertenencia» a la nación birmana, ser *dobama* ('birmano') equivalía a ser budista y bamar, una identidad esencialista que excluía a minorías tanto por lo que respecta a la etnia como a la religión (Clinic 2020). Cuando en 1948 llegó la independencia, la construcción nacional se promovió sobre atributos homogéneos comunes, en este caso, la etnicidad bamar y la religión budista. Lo chinos, los indios y los musulmanes quedaron excluidos, aunque hiciese generaciones que vivieran en Birmania. Las subsiguientes guerras internas obligaron a millones de personas a irse.

La legitimidad del espacio central posindependencia, dominado o bien por la junta militar o bien por el gobierno civil, ha sido violentamente contestada por las minorías no bamares y no budistas durante las últimas siete décadas (ICG 2017). El resentimiento y la victimización que sienten los no bamares y los no budistas quedan agravadas por

la ausencia de intentos serios de modificar la narrativa esencialista y excluyente que rodea los conceptos de *raza* e *identidad*. En ausencia de respuestas a los agravios de las minorías étnicas, la liberalización política ha llevado al fortalecimiento del etnonacionalismo (ICG 2017).

Injerencia de los militares: deficiencia e ineficiencia estatal

Los bamares han estado detrás de los golpes de estado perpetrados por el ejército (el Tatmadaw) y han gobernado durante cinco décadas de manera implacable. El proceso de construcción de la paz y de construcción nacional quedó interrumpido a partir de la intervención del ejército. Desde la institución de un gobierno civil en 2010, los militares continúan ostentando el poder en la sombra. Las fuerzas armadas se han transformado en un «estado dentro del estado» que hace y deshace a su antojo. La paz se ha convertido en un sueño lejano.

Sus líderes continúan insistiendo en que aún existen amenazas diversas contra la «seguridad del estado» y la «seguridad nacional» (Renaud Egreteau 2018). Los militares utilizan las amenazas del «alzamiento étnico» y la necesidad de evitar la «desintegración de la Unión» para justificar su «injerencia institucionalizada en el gobierno civil». Tres ministerios importantes del gabinete de la Unión están bajo la autoridad exclusiva de las Fuerzas Armadas (Defensa, Asuntos Interiores y Asuntos Fronterizos), y una cuarta parte de los escaños del Parlamento están reservados a los hombres de uniforme, hecho que les otorga poder de veto sobre cualquier cambio en la constitución. Todo ello contribuye a la deficiencia y a la ineficiencia estatal, y boicotea los esfuerzos del gobierno civil por lograr la paz.

El pueblo birmano no había admirado nunca la junta militar, pero con maniobras sutiles de construcción de imagen, sobre todo tras la liberación política, los militares se han ido ganando la admiración de la mayoría del grupo bamar. El problema de los musulmanes rohinyás une a la mayoría de birmanos. Los militares lo lograron convirtiendo astutamente a los musulmanes rohinyás en el chivo expiatorio y atrayendo la admiración de los mayoritarios bamares. Los monjes extremistas se sumaron a la disputa. Pese a las críticas occidentales, Aung San Suu Kyi acabó defendiendo al ejército ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ/ICJ). La reacción occidental fue indiferente tras la crisis de 2017 en el estado de Rakhine, que acabó con más apoyo de la población a los militares y dejó al descubierto el etnonacionalismo que define desde hace bastante tiempo la política birmana. La agen-

da política oculta del ejército y sus intereses económicos son grandes obstáculos para un estado auténticamente democrático.

Economía ilícita: la maldición de los recursos, el hub internacional de la droga, las industrias extractivas

Birmania tiene petróleo, gas natural, maderas preciosas, minerales, energía hidroeléctrica y gemas. Muchos de estos recursos naturales se hallan en tierras fronterizas donde son frecuentes los conflictos, o en la costa (Witness 2015). Las tierras fronterizas ricas en recursos son el refugio de los señores de la guerra y los barones de la droga. El estado de Kachin, en el norte, es rico en jade, que aporta miles de millones (de dólares) cada año. Según un informe publicado por Global Witness en 2015, la industria del jade está controlada por la «élite [de la antigua junta] militar, señores de la droga tolerados por los Estados Unidos y empresas implicadas», mientras que «muy pocos beneficios llegan a la población del estado de Kachin o a los birmanos en general». Basado en este claro ejemplo, Global Witness calculó que la producción total de jade habría ascendido a 31.000 millones de dólares en 2014, aunque oficialmente solo se declaró un 3%. La economía ilícita tiene mucho peso en la economía nacional. Según un cálculo aproximado, la economía ilícita mueve unos 69.000 millones de dólares americanos.

49

Tráfico de drogas, economía extractiva

Birmania es el segundo productor mundial de opio después de Afganistán: produce un 25% del opio mundial y forma parte del Triángulo de Oro. La frontera es la convergencia de la militarización (Aung Thwin y Aung Thwin 2013). Según Global Witness, las partes asociadas ganaron un total de 122.800 millones de dólares americanos entre 2005 y 2015⁵. Se mueven miles de millones de dólares mientras el país languidece al final del *ranking* de países menos desarrollados.

Las empresas y los *holdings* a manos de los militares, como Myanmar Economic Corporation, fortalecen las inversiones en el sector extractivo. Teniendo en cuenta que las explotaciones mineras a menudo se encuentran en zonas afectadas por conflictos entre Tatmadaw y actores no estatales, a los militares les interesa mantener el control de estas zonas. Esto tiene implicaciones importantes para el proceso de paz⁶. Los militares, en un intento por sofocar las rebeliones fronterizas, se han ganado sus enemigos a través de un «capitalismo de alto

5. [Myanmar's holds a diverse mix of mineral resources](#)

6. Oye, Mari and Thet Aung Lynn. 2014. [Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar Key Considerations for Wealth Sharing](#). Yangon: The Asia Foundation, International Growth Centre, and Myanmar Development Research Institute – Centre for Economic and Social Development.

el fuego», permitiendo el saqueo indiscriminado de los recursos por parte de grupos armados, hecho que empobrece a los habitantes de estas zonas.

Leyes de Nacionalidad y marginalización de grupos como la población rohinyá

La Ley de Nacionalidad de 1948 especificaba que, para ser considerado indígena, un grupo tenía que haberse establecido de manera permanente en Birmania antes de 1826 (el año anterior al inicio de la primera guerra anglobirmana). Cerca de un millón de musulmanes rohinyás no tienen estado. El ascenso al oeste del populismo xenóforo, que tiene un elemento islamofóbico importante, ha sido un instrumento útil para los «nacionalistas budistas» de Birmania, ya que les ha dado credibilidad y ha justificado sus argumentos y narrativas.

Hacia la construcción de un futuro de esperanza

La primavera democrática

50

Aung San Suu Kyi se ha erigido como la gran esperanza del pueblo birmano. Su prestigio entre la sociedad ha aumentado gracias a su compromiso por la democracia. El conflicto de los rohinyás y la defensa que hizo el ejército en la Corte Internacional de Justicia continúan siendo una gran mancha sobre ella, que había sido la gran favorita de Occidente. Pero este hecho ha consolidado el apoyo que tiene por parte de la mayoría bamar. Las elecciones enfriaron claramente sus políticas. Pese al intento de los militares por alterar las elecciones, el pueblo birmano votó de manera abrumadora a favor de Aung San Suu Kyi. Sorprendentemente, también recibió un gran apoyo de los grupos étnicos no bamares de la periferia, que la protegieron a ella antes que a los partidos y grupos armados de su etnia, siempre en disputa.

Tiene un capital social enorme. Su mandato es claro: iniciar la reconciliación y construir una nación de paz y prosperidad. Ya ha empezado el viaje. Quiere formar una coalición de todos los partidos para la construcción nacional. Es el momento decisivo para la líder septuagenaria de ganarse la confianza de los grupos étnicos minoritarios del país.

Mitigar la injerencia del ejército

La presencia institucionalizada del ejército en la legislatura y el hecho de que ocupe tres ministerios importantes ha acabado debilitando la transición democrática. El «poder moral de las manos vacías de Aung San Suu Kyi» ha arrojado un golpe al ejército con sus actos contra los seguidores del ejército y los monjes extremistas. Ahora es preciso que cure la fragilidad del Estado con sus esfuerzos por controlar a los militares y para enviarlos de nuevo a los cuarteles. Parece una utopía, pero Birmania está cambiando de rumbo.

Apartarse del proceso excluyente y esencialista de construcción nacional

La élite bamar debe cambiar el proceso excluyente y esencialista de construcción nacional que ha sido rebatido violentamente por las nacionalidades no bamares. El general Aung San, el padre de la nación y padre de Aung San Suu Kyi, inició una estrategia inclusiva de construcción nacional con las conferencias de paz de Panglong. Su hija, Aung San Suu Kyi, ha continuado con este proceso. Ha demostrado la astucia invitando a los grupos no bamares a ser socios igualitarios del nuevo gobierno.

51

Hacia un federalismo político y económico

Los recursos naturales deben aprovecharse para incentivar la paz y no el conflicto. En Birmania, el centro mayoritario y la periferia minoritaria tienen exigencias contrapuestas por lo que respecta a la tierra y a los recursos naturales. Diversas organizaciones étnicas armadas reclaman la autodeterminación étnica, el control subnacional de los recursos naturales y la responsabilidad de la gestión de estos recursos, mientras que el ejército, el Tatmadaw, intenta mantener un sistema estatal centralizado y unitario. El gobierno de Aung San Suu Kyi debe implementar el federalismo económico y expulsar a las milicias étnicas armadas y a las mafias internacionales de la economía ilícita. El papel de los gobiernos de China y Tailandia es vital.

Reformar la Constitución para defender los derechos humanos y de la ciudadanía

La primera víctima de la Constitución impuesta en 2008 por los militares es Aung San Suu Kyi. La naturaleza excluyente de la Constitución le ha impedido ocupar cargos oficiales, aunque sea muy popular y la líder de facto. Ella misma definió la cláusula excluyente como «injusta, imparcial y antidemocrática». También ha tenido que aceptar que casi un millón de musulmanes rohinyás hayan perdido sus derechos por culpa de esta ley antidemocrática. La desnacionalización es una maniobra política de la junta militar. Es alentador ver que el partido de Aung San Suu Kyi incluyó a dos candidatos musulmanes en las últimas elecciones, cambiando así la percepción que hay de esta maltratada minoría. La Ley de Nacionalidad de 1982 continúa siendo una de las más injustas que existen. Esperemos que Aung San Suu Kyi pueda enmendar esta injusticia.

Son retos descomunales, pero la historia ha llamado a una líder que es querida y admirada por todo el mundo. En los intentos por apartarla de la vida pública, el ejército ha perdido mucho terreno ganado. Con una presencia abrumadora en el Parlamento, ha llegado el momento de hacer historia. El optimismo llena las calles. Esperemos que no sea otro arranque en falso para la Tierra Dorada, que ha vivido ya demasiadas pesadillas. El pueblo de Birmania se merece una nueva alborada de esperanza. (Artículo original entregado el 5 de enero de 2021)



Últimos títulos

17. *En las víctimas está Dios reconciliando el mundo*. F. Javier Vitoria
18. *Capital e ideología. Selección de textos*. José I. González Faus
19. *COVID-19: más allá de la pandemia*. Joan Carrera i Carrera
20. *Mi experiencia del Sínodo para la Amazonía*. Víctor Codina
21. *Valores, emociones, trabajo y vida: El reto de la conciliación*.
Alfons Calderón
22. *Conflictos olvidados*. Varios Autores

La **Colección Virtual** es una recopilación de materiales publicados exclusivamente en la web. Aquí encontrarás cuadernos que por su extensión o por su formato y estilo diferentes no hemos editado en papel, pero que pensamos tienen el mismo rigor, sentido y calidad que los Cuadernos CJ. Deseamos que circulen por la red, y para ello contamos contigo.

Encontrarás los cuadernos de esta colección en:
www.cristianismeijusticia.net/es/coleccion-virtual



COLECCIÓN
VIRTUAL

Cristianisme i Justícia

Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona
93 317 23 38 • info@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

